

X. CONFLICTOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

EN AMÉRICA Latina y el Caribe hay un sello en su continuidad histórica: el conflicto social. No se puede entender la cultura ni el desarrollo ni la política sin esa enorme y dramática experiencia humana. Los latinoamericanos, en su diversidad de experiencias, se han hecho de protestas y movimientos contra diversas y complejas formas de dominación.

Un rasgo particular ha sido y es la presencia permanente, independientemente de la orientación política y económica, del Estado como actor en todas las esferas de la vida social. El Estado, aunque no siempre, también ha sido un productor de sociedad. Y así, los conflictos sociales por lo general se han expresado más bien en los marcos del Estado que directamente entre actores sociales. Las orientaciones políticas del desarrollo casi siempre tienen como referencia el Estado.

Desde los años ochenta, una diversidad de formas de acción colectiva han sido centrales en la oposición y derrota de los autoritarismos, en la oposición al neoliberalismo, en la emergencia de los gobiernos neodesarrollistas y progresistas y, más recientemente, en los nuevos movimientos socioculturales —como los de los pueblos originarios y afrodescendientes—, al igual que en los movimientos de mujeres y de jóvenes, buscando diversas formas socioculturales y globales de transformación y, a la vez, nuevas formas de hacer política (Calderón, 1985; PNUD, 2009).

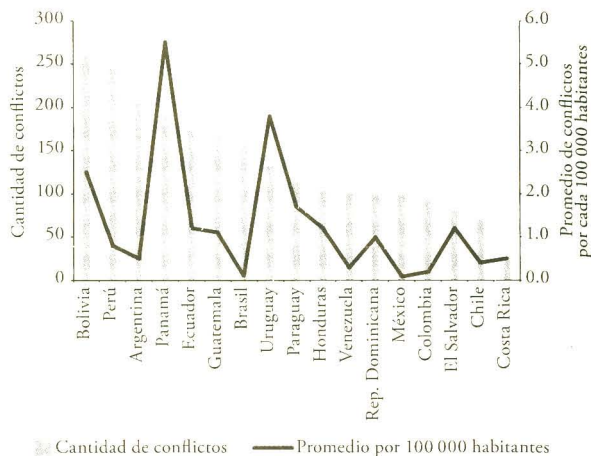
LA DINÁMICA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES

La conflictividad social reciente, eje de la dinámica y de las posibilidades de la política y el desarrollo, comparte rasgos comunes en la gran mayoría de los países de la región: plataformas de exclusión y desigualdad crónicas en su mayoría cuestionadas por la ciudadanía; conflictos complejos que asocian tales desigualdades con su cantidad y su intensidad; combinación de protestas sociales que se expresan tanto en el plano social-nacional como en el plano cultural-global; racionalidades prácticas en los conflictos por la reproducción social que conviven con demandas de mayor eficacia y legitimidad institucional y con conflictos culturales de carácter sistémico. Asimismo, aparecen estados omnipresentes en todas las esferas de los conflictos con serias limitaciones para procesarlos. Al mismo tiempo, las sociedades enfrentan conflictos cada vez más fragmentados, nuevos espacios públicos vinculados con sistemas de comunicación en los cuales se representan de manera contradictoria dichos conflictos. Por su parte, los conflictos tienden a desplazarse crecientemente hacia las redes de información y comunicación con efectos multiplicadores en los nuevos escenarios de poder.

El análisis que se da a continuación ejemplifica esta dinámica. Se basa en algunas conclusiones del estudio sobre las protestas sociales en América Latina que analiza los conflictos registrados en 54 periódicos de 17 países entre octubre de 2009 y septiembre de 2010. En total, se detectaron y analizaron 2 318 conflictos (Calderón [coord.], 2012: 121).

La lógica de estos ámbitos de conflicto está relativamente diferenciada. Los conflictos de reproducción social comprenden, principalmente, las demandas para satisfacer

GRÁFICA X.1 *Cantidad de conflictos y promedio por cada 100 000 habitantes. América Latina, octubre de 2009-septiembre de 2010*
(en cantidad y en porcentajes)



FUENTE: Elaboración propia sobre la base de *Cuaderno 1, prospectiva política. La protesta social en América Latina*.

las necesidades básicas de bienestar referidas a un mínimo de vida digna, trabajo, salud, educación, vivienda, que permitan la reproducción de los individuos y las colectividades humanas; su lógica es esencialmente pragmática. Los conflictos del campo institucional se orientan al logro de mayor eficacia en el funcionamiento estatal; su lógica está sobre todo vinculada a la legitimidad, la eficiencia y eficacia en la gestión institucional. Los conflictos culturales se orientan a lograr un cambio de los modos de vida; son ideológicos y tienen una lógica más bien estratégica.

LOS CONFLICTOS ASOCIADOS A LA REPRODUCCIÓN SOCIAL

Con “reproducción social” se hace referencia tanto a las áreas básicas del desarrollo humano (trabajo-ingresos, salud, educación y vivienda, entre otros), como a aquellos aspectos relativos al bienestar general de una sociedad y a la calidad de vida. Los conflictos en este campo, según el estudio, poseen, sobre todo, una lógica práctica, pues se vinculan con demandas concretas en términos de las condiciones de vida cotidiana de las personas (como mejoras salariales y de la situación general de empleo, asistencia en salud, mayor calidad educativa y viviendas dignas, entre otras) y constituyen el primer campo de conflicto en importancia numérica en la región.

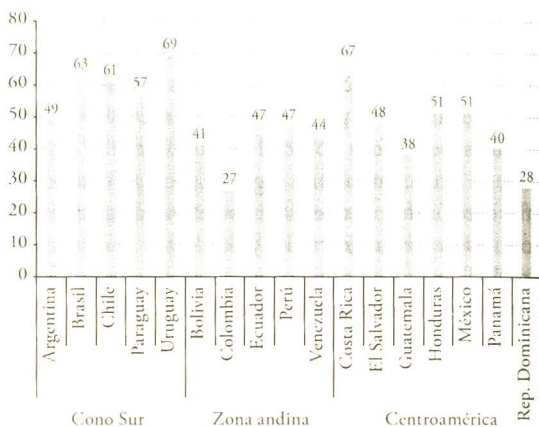
Vale la pena subrayar que los conflictos vinculados a la reproducción social surgen principalmente por asuntos de índole socioeconómica, y más que nada están asociados con el empleo y el consumo colectivo. Otros asuntos que llevan a la movilización de la gente son la discusión y/o aplicación de medidas percibidas como desestabilizadoras o perjudiciales de la situación laboral lograda y, en general, de la situación económica, o cuestiones relativas a la propiedad y la producción de la tierra. El 59% de los conflictos en el campo de la reproducción social se relacionan con demandas laborales y salariales; ello da una idea de la gran significación que tiene el trabajo en las sociedades latinoamericanas. En 9 de los 17 países que abarcó el estudio citado los conflictos vinculados con el trabajo y con la situación económica superaban 50% del total.

La información sobre los conflictos asociados a la reproducción social muestra que los problemas socioeconómicos

ocupan un lugar central en la preocupación de la gente. En el nivel regional, estos conflictos representan 47% del total, siendo los más numerosos en 12 de los 17 países estudiados. Analizada la información por subregiones, en la región andina y en Centroamérica los conflictos asociados a la reproducción social representan aproximadamente 42% del total. Es llamativo cómo, sin embargo, este porcentaje sube a 58.7% en el Cono Sur.

Esta situación coloca sobre el tapete el tema de la calidad del desarrollo. La disminución de la desigualdad y de la pobreza será sólida y sostenible sólo si se asienta en la calidad

GRÁFICA X.2 *Conflictos de reproducción social. América Latina, octubre de 2009-septiembre de 2010 (en porcentajes sobre el total de conflictos de cada país)*



FUENTE: Elaboración propia sobre la base de *Cuaderno 1, prospectiva política. La protesta social en América Latina*.

del empleo de las personas y en niveles óptimos de bienestar social.

Si bien los conflictos por la tierra representan sólo 5.3% del total en América Latina, son aquellos con la mayor tendencia a radicalizarse, cosa que ocurrió en 53% de los casos durante el periodo analizado. Sin embargo, los conflictos por cuestiones laborales, salariales —o ambos— y aquellos asociados con medidas consideradas negativas en términos económicos por la población también tuvieron un alto nivel de radicalización: 49% para el primer tipo de conflictos y 42% para el segundo. La tendencia a la radicalización de los conflictos asociados a problemas de tierra pareciera vincularse tanto con la falta de espacios o de mecanismos institucionales para procesar este tipo de problemas —o ambas cosas— como con la complejidad que muchas veces implica en términos de “cruces” con demandas de grupos étnicos particulares y con intereses políticos y económicos locales. Por otra parte, muchos de los países analizados tienen un retraso histórico en la realización de reformas agrarias que permitan romper con relaciones sociales tradicionales vinculadas al régimen de la hacienda.

LOS CONFLICTOS INSTITUCIONALES

Estos conflictos expresan las demandas de la gente de mayor eficacia y eficiencia de las instituciones y dejan en evidencia la distancia entre estas demandas y la escasa capacidad de las instituciones estatales para dar respuestas satisfactorias a tales demandas. Más que una crítica formal al sistema institucional, los conflictos ubicados en este campo cuestionan el funcionamiento de dichas instituciones, aunque

en muchos casos la crítica al sistema es parte del discurso en este ámbito de conflictividad.

Las demandas expresadas en este ámbito se conectan con un reclamo de mejorar la gestión y la administración pública, a un aumento de la prestación y de la calidad de los servicios públicos, a agilizar y transparentar el sistema de justicia y a lograr mayor legitimidad de las autoridades. Son conflictos que inciden negativamente en la calidad de la reproducción social, demandas que en general tienen que ver más con una institucionalidad frágil y falencias en la aplicación de normas en muchos países de la región latinoamericana que con la ausencia de instituciones. Puede sostenerse que en este campo, el Estado es un “productor” de conflictos, cuestión que se habría acelerado tremendamente en los últimos años.

Los conflictos institucionales ocupan el segundo lugar en términos numéricos en América Latina, con un 38% del total de conflictos. Los asuntos registrados con mayor frecuencia son reclamos por ineficiencia en la gestión administrativa y protestas en torno a una prestación de servicios públicos insatisfactoria (generalmente por carencia o déficits de obras públicas en localidades particulares o por límites en el suministro de servicios básicos que el Estado debería garantizar).

En el ámbito subregional, tanto en la región andina como en Centroamérica, México y República Dominicana, estos conflictos representan, en promedio, 41% del total. Como contraparte, en el Cono Sur representan 29% de los conflictos y, particularmente, en Uruguay sólo 20 por ciento.

En cuanto al nivel de radicalización de este tipo de conflictos, aquellos que más se radicalizan son los asociados a problemas de límites político-administrativos (56%), al incum-

plimiento de convenios (53%) y al cuestionamiento o falta de reconocimiento de autoridades (49%). Asimismo, alrededor de 40% de los conflictos vinculados con la ineficiencia de la gestión administrativa y la prestación de servicios públicos alcanza niveles de radicalización importantes. El hecho de que un alto porcentaje de los conflictos institucionales se radicalice deja en evidencia la debilidad estructural de las instituciones de gobierno en la región.

En este campo de conflictos, existe un costado “parainstitucional”, que marca la relación entre Estado y actores sociales. Esa “parainstitucionalidad” supone un flujo de juegos de intereses entre espacios y mecanismos formales e informales de procesar y resolver conflictos que tiene relevancia en la región. Una hipótesis explicativa de este fenómeno es la coexistencia de relaciones sociales basadas en redes y jerarquías, “legado” del pasado colonial, y de instituciones modernas. Ejemplo de ello es el clientelismo. Este tipo de relaciones informales se da en todos los espacios de interacción social, incluso a los ámbitos formales. Es, asimismo, una base de los sistemas de corrupción del sistema político y del Estado y del impacto de economías criminales.

LOS CONFLICTOS CULTURALES

Los conflictos culturales cuestionan formas de vida y organización de las sociedades y se orientan a lograr nuevos modos de convivencia y de interacción social de las culturas, personas, grupos e instituciones; enfatizan la calidad de la vida cotidiana con base no sólo en cuestiones objetivas y prácticas, sino subjetivas y valóricas. Por ello, se los ubica como estratégicos, pues plantean la búsqueda de cambios

profundos en el modo de convivir de nuestras sociedades. Los altos niveles de desigualdad, sobre todo socioeconómica pero también cultural, y la debilidad institucional en América Latina son factores importantes que se encuentran en la base de este tipo de conflictos. En este ámbito, en la región sobresalen los conflictos de seguridad ciudadana, los político-ideológicos y cada vez con mayor énfasis los ecológicos. En estos últimos prevalece la oposición a un modelo de desarrollo vinculado con la explotación, la reducción y la contaminación de los recursos naturales. Otro tipo de conflicto que ha crecido en los últimos años es el de las relaciones de género, producto de los cuestionamientos al patriarcado. Así, muchos de estos conflictos buscan redefinir relaciones sociales para lograr una mejor convivencia ciudadana y mayor seguridad.

Si bien los conflictos culturales tienen menor peso en términos relativos, pues configuran sólo 15% del total en la región, su impacto es considerable, gracias a las redes sociales viabilizadas por las nuevas tecnologías de información y debido a que cuestionan no sólo prácticas con un sentido económico, sino sobre todo los valores sobre los que se fundamentan las sociedades. Es decir, suelen contener preguntas sobre qué tipo de sociedades queremos y qué desarrollo es posible. Por su impacto cultural es posible considerarlos conflictos estratégicos que afectan los vínculos de nuestras sociedades con el Estado y con los procesos de globalización y que pueden llegar incluso a cuestionar la democracia.

El 28% de los conflictos culturales tiene como horizonte lograr mayor seguridad ciudadana frente a la delincuencia. El 26% se da en el plano de la lucha ideológico-política, en general por visiones opuestas entre partidos políticos que pueden llevar a un enfrentamiento del tipo amigo-enemigo.

Se trata asimismo de los conflictos culturales que más se radicalizan, seguidos por aquellos que demandan mayor seguridad.¹ Por su parte, 24% de los conflictos culturales tiene contenido ecologista y cuestiona el manejo de los recursos naturales por parte de organismos públicos y privados o plantea una demanda de control de tales recursos. Por su contenido universal en términos de afectación del medioambiente en el ámbito global y de cuestionamiento de un desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales, los asuntos ecológicos tienen una gran repercusión y es muy difícil discutir sus razones. Aquí, por ejemplo, se encuentran conflictos asociados con el extractivismo informacional, que han crecido en toda la región, como también los vinculados a la construcción de infraestructura, sobre todo en la Amazonia.

Dos actores destacan por el lugar clave que ocupan en este ámbito de conflicto. Por un lado, los jóvenes, tanto por su participación en espacios de movilización como por el planteamiento de nuevas demandas. Tecnosociabilidad, conflictos en red y nueva politicidad son los rasgos propios de los jóvenes en este espacio. Por el otro, las mujeres, por su carácter propositivo y su potencial de cambio cultural, político y social.²

En suma, existe una mayor complejidad del conflicto social vinculada con sistemas políticos y Estados con capacidades de gestionarla cada vez más limitadas.

¹ La radicalización ideológico-política amigo-enemigo y la violencia afectan muy negativamente la gobernanza y la convivencia democrática. Parece clave garantizar espacios de conflicto democráticos y de convivencia político-ideológica.

² Véase PNUD (2009). *Informe sobre Desarrollo Humano para Mercosur 2009-2010. Innovar para incluir: Los jóvenes y el desarrollo humano*. Buenos Aires, PNUD, Libros del Zorzal.

LOS JÓVENES PROTESTAN³

Las nuevas formas de comunicarse involucran el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación en el espacio público. Éste se entiende como un lugar de “encuentro”, donde las ideas y los valores se forman, se transmiten, intercambian, respaldan y combaren. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten una interacción más ágil, flexible y espontánea entre los actores, quienes gracias a ellas pueden ejercer una participación más activa en la política. De esta forma, se amplían las posibilidades de acción colectiva debido al fácil acceso y a los bajos costos de uso tanto de internet como de las telefonías móviles.⁴ Participar en un foro, un blog o un grupo dentro de una red social está más al alcance que otras formas de participación política.

Los conflictos se caracterizan cada vez más por nacer a partir de la red, ya que cuando se presenta un malestar o una demanda generalizada es transmitida espontáneamente por miles de personas en un periodo relativamente corto, sobre todo hoy vía redes sociales, pero también a través de blogs, foros, cadenas de correos mensajes de texto. Mediante estos instrumentos, los ciudadanos pueden organizarse frente

³ Retoma texto de Calderón y Szmukler (2014), *Dossier Vanguardia*.

⁴ En el periodo 2002-2010, gran parte de los países de la región duplicaron el nivel de uso de internet de 19 a 39% (Latinobarómetro, 2010). Datos más recientes, de 2016, muestran que en promedio 60% de los habitantes de los países seleccionados acceden a internet, es decir, 25 puntos porcentuales más que en 2010 y que hay alrededor de 118 suscripciones a teléfonos celulares por cada 100 habitantes (Unión Internacional de Telecomunicaciones. ITU, por sus siglas en inglés). Véase también el capítulo v del presente libro.

al conflicto e intercambiar información. Un “ciberactivismo” que promueve deliberación y acción concertada en la red y en las calles ya es un dato de la realidad política latinoamericana y mundial.

La globalización no sólo ha producido concentración de poder y consumo de mercado, también ha traído como consecuencia el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas en las que prima la espontaneidad, el voluntarismo del activismo político y la autoorganización, por tanto, se empiezan a redefinir individualmente las demandas y los proyectos colectivos en la red plantean, de diversa manera, la valorización de la libertad y la dignidad de las personas. “Redes de indignación y esperanza” denominó Castells a estas nuevas formas de actuar colectivamente en los niveles multicultural y global.

Se trata de protestas —como se analizó en los casos de los movimientos de los pueblos originarios y afrodescendientes— de género y ecológicas, con fuerte contenido ético y subjetivo y ocurren prácticamente en todas las sociedades y culturas. Colocan en el centro del debate la cuestión ética de la política, de los derechos humanos y ecológicos, de la dignidad de las personas. Tienden a ser espontáneos, horizontales, deliberativos, prácticos, virales (alternancia en diferentes espacios), multiculturales, policéntricos. En suma, demandan canales de expansión democrática y producen una crítica ética, pero práctica al poder.

Algunos rasgos de las protestas en la red protagonizadas por jóvenes en Chile, México y Brasil son parte de nuevas dinámicas que también operan a escala global. Por ejemplo, en Túnez, Egipto, Islandia, España, Estados Unidos, Grecia, Portugal, etc. (Castells, 2012).

Los jóvenes chilenos

Recuperando la memoria de Allende en la Alameda (“Se siente, se siente, Allende está presente”), buscaban proyectar un nuevo tipo de vida, de educación y de política: sus múltiples demandas se centraban, ni más ni menos, en el papel estratégico que tiene para una sociedad innovadora y democrática una educación inclusiva y de calidad.

En mayo de 2011, jóvenes estudiantes universitarios chilenos comenzaron a manifestarse por una educación pública de calidad y gratuita. Sus demandas puntuales eran el aumento y pago de las becas estudiantiles, la disminución de los intereses de los préstamos para la educación, la participación estudiantil en el diseño y en la gestión de las políticas educativas y en las universidades, y un mayor control del Estado con respecto a las universidades privadas.

Aunque el movimiento se centraba en el ámbito educativo, generó reflexión y debate en la sociedad y fue ganando legitimidad (de acuerdo con datos de Adimark, en agosto de 2011, 76% de los chilenos manifestó estar de acuerdo “con las demandas que han presentado los estudiantes universitarios y secundarios en el último tiempo”).⁵ Ello hizo que se empezaran a cuestionar otros ámbitos de poder en la esfera pública (el sistema de salud, los problemas de vivienda, el sistema de pensiones), articulándolos en torno a un nuevo modo de vida más “latinoamericano”, que rechaza la perspectiva neoliberal en materia de políticas públicas y busca inclusión y justicia social, ampliación de la participación ciudadana y profundización de la democracia en tér-

⁵ Para mayor detalle, véase Adimark, en <https://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/o8_ev_gob_agos_2011.pdf>.

minos de extensión y reconocimiento de derechos (por ejemplo, cuestiona el accionar del Estado en relación con las minorías étnicas, especialmente con los mapuche; pero también critica el deterioro del medioambiente, el racismo y el sexismo presentes en la sociedad chilena). Asimismo, la participación que generó el movimiento rebasó los límites del sistema de partidos y también lo cuestionó.

El movimiento se inició en las redes sociales, pero fue ganando espacio en las calles y comenzó un proceso de negociación con el gobierno. De composición ideológica diversa, incluyó corrientes de izquierda (comunistas, anarquistas) así como estudiantes independientes deseosos de participar en la construcción de otro tipo de universidad y de una sociedad distinta de la pautada por los mercados. El carácter democrático del movimiento se observa en los debates públicos y en las decisiones que se toman mayoritariamente en asambleas.

Si bien el movimiento aún no ha logrado sus metas, los cambios generados en la agenda política y cultural chilena son evidentes. ¿Podrá integrar el sistema de partidos estas demandas, o las protestas se reiniciarán construyendo una nueva dinámica del conflicto y el cambio?

Un hecho reciente particularmente importante fue la última elección nacional de 2017. Allí, el movimiento optó por transformarse en una nueva fuerza política autónoma que llegó a obtener un porcentaje superior al 20% de los votos. Ninguno de los dirigentes llegaba a los 35 años, condición institucional para postularse a la presidencia, y tuvieron que recurrir a la periodista feminista Beatriz Sánchez, candidata independiente, para poder participar en la contienda. Esta situación, más allá de los méritos de Sánchez, refleja el desfase entre la vieja dinámica política de Chile y la realidad de los nuevos liderazgos.

Movimiento YoSoy132

En el contexto de las elecciones nacionales en 2012, en México, el Movimiento YoSoy132 surgió como respuesta de un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México cuando, en mayo de ese año, luego de una conferencia brindada allí por el entonces candidato a la presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto, se produjeron incidentes a raíz de que él justificara la represión de una manifestación de jóvenes ocurrida en 2006, cuando era gobernador del Estado de México. Esos incidentes fueron grabados en celulares y difundidos por internet.

Tras estos hechos, que hicieron que Peña Nieto tuviera que salir de la universidad, tras refugiarse en el baño, bajo un operativo de seguridad, medios de comunicación y autoridades universitarias descalificaron lo sucedido diciendo que no era una expresión genuina ni representaba la opinión de los estudiantes y que los incidentes habrían sido promovidos por personas ajenas a la universidad.

Ante estas expresiones, estudiantes de la misma universidad subieron a internet un video en el que asumieron su participación en los incidentes y reafirmaban su posición; lo firmaron como “131 estudiantes”, e incluyeron nombre y apellido, número de matrícula y facultad a la que pertenecían. Inmediatamente, el video fue reproducido por miles de personas en YouTube y se viralizó en las redes sociales, en las cuales se colocó la etiqueta “YoSoy132” para manifestar el apoyo al grupo de jóvenes universitarios.⁶

⁶ Un análisis sobre el movimiento puede verse en Monteverde, Carrillo y Esteve del Valle (2013).

Días después, el movimiento gestado en las redes virtuales se manifestó en movilizaciones callejeras y en múltiples asambleas. Las demandas principales eran la profundización democrática, la transparencia y la defensa de la libertad de expresión, además de expresar un gran descontento hacia la clase política y la corrupción y cuestionar la manipulación de la información en los medios de comunicación masiva. El movimiento se definió como estudiantil, apartidista, plural, laico, antineoliberal, de oposición a Peña Nieto, pacífico y con orientación social, política y humanista. Surgió en una universidad privada y luego fue tendiendo puentes con estudiantes de las universidades públicas, lo cual fue el reflejo del creciente malestar de los jóvenes con el sistema político mexicano. Éste fue un movimiento creado por una nueva generación de jóvenes que cuestionaba a la vez la cultura política liderada por los clásicos partidos en México y a los dos monopolios televisivos del país, Televisa y Televisión Azteca, y que buscaba nuevos caminos para participar y defender sus derechos humanos y ciudadanos. El futuro de esta movilización es incierto, lo que sí se sabe es que tuvo una importante recepción en la juventud y en los centros educativos de sectores medios y populares y, en gran medida, esta aceptación se volvió una referente de la política mexicana.

Movimento Passe Livre

En Brasil, a inicios de junio de 2013, comenzaron las protestas contra el incremento de la tarifa del transporte público, que fueron en aumento hasta el día 14, cuando la policía las reprimió de manera violenta. En la ciudad de São Paulo, las manifestaciones, convocadas inicialmente a través de las

redes sociales, bloquearon las principales avenidas. Ellas fueron encabezadas, entre otras organizaciones, por el Movimiento Passe Livre, que desde 2005 lucha por la disminución del costo del transporte público y que se organiza a través de las redes sociales (Rolnik, 2013; Castells, 2015). El movimiento estaba integrado por jóvenes independientes, partidos políticos de izquierda y anarquistas, en su mayoría estudiantes universitarios y sectores profesionales; también participaron sectores populares de la periferia. El movimiento se organizó de manera descentralizada y en red y tuvo un carácter horizontal.

Si bien el germen de las manifestaciones fue el aumento en las tarifas del transporte público, de gran impacto entre los sectores medios y bajos, las demandas se multiplicaron luego en las calles, sobre todo aquellas que se oponían a los costos que implicaban que Brasil fuese sede de megaeventos deportivos (Copa FIFA Confederaciones 2013, Mundial de Fútbol 2014, Juegos Olímpicos 2016), mientras los servicios públicos eran ineficientes y caros. Pero también se reclamó mayor acceso a salud y educación, transparencia de las instituciones públicas, lucha contra la corrupción, el fin de la militarización de la policía y se reivindicaron derechos de los pueblos indígenas. Se plantearon demandas de ampliación del papel del Estado en el ámbito público y de participación ciudadana y, sobre todo, que la sociedad fuese escuchada por fuera del sistema político tradicional, lo que también constituye un cuestionamiento al mismo.

Las protestas iniciales, que comenzaron en las redes sociales en las cuales prosiguió el debate, lograron el objetivo de detener el aumento de tarifas. Nuevas demandas y reivindicaciones ciudadanas se fueron generando en los meses siguientes, aunque en forma más fragmentada y sectorial.

Sin embargo, los incidentes registrados durante algunas movilizaciones —represión policial, por un lado, y saqueos y depredación de patrimonio por una minoría radicalizada, por el otro— dividieron a la opinión pública y afectaron la legitimidad del movimiento. La gran mayoría de la población brasileña se oponía a la violencia.

Algunos analistas sostienen que estas protestas constituyeron una revalorización de la vida política y de la calle como lugar de expresión política y espacio público, desde donde se pueden lograr resultados concretos. Asimismo, pareciera que lo que se estuvo cuestionando es un modelo económico y social que, a pesar de los avances en disminución de la pobreza en los últimos 10 años, no ha logrado responder a las múltiples demandas que fueron en aumento junto con las mejoras logradas. Es decir, se advertía una insatisfacción generalizada, especialmente en los sectores medios que tenían que hacer muchos esfuerzos para mantenerse como tales. Otros vieron un cuestionamiento al ejercicio del poder político: detrás de las reivindicaciones concretas habría una demanda ética de cambios sustantivos en términos de participación política en la toma de decisiones y ampliación del sistema político, de mayor ciudadanía. Ello fue reconocido incluso en el discurso de la presidenta Dilma Rousseff (Nogueira, 2013).

Estos movimientos en las calles, que combinan reclamos puntuales y demandas de ampliación ciudadana, muestran que hay muchos que no comparten ni la “privatización” de las ciudades ni su segmentación. Hacen pensar en nuevos modelos de desarrollo y convivencia urbana y dejan en evidencia la exclusión o la inclusión parcial de amplios sectores que viven en las ciudades y sus alrededores y que quieren también ser parte de ellas, para darles sentidos diferentes

al del consumo promovido por la economía de mercado. Había carteles en las manifestaciones que decían: “Disculpe la molestia, estamos cambiando el país”. El sentido principal parecería ser tanto la búsqueda de un cambio a partir del descontento generado por el devenir de la vida urbana y sus costos inequitativos como una crítica a la ética de los políticos.

Sin embargo, también han emergido en Brasil y otros lugares de la región movimientos sociales conservadores de extrema derecha que han dado sustento a candidatos políticos como Jair Bolsonaro. Las intervenciones de corte autoritario e incluso fascistas en las redes sociales están reviviendo culturas autoritarias ancestrales que se ven reforzadas por la referencia al neofascismo en Europa y el liderazgo de Donald Trump. La política de la extrema derecha está también movilizada en las calles y en las redes y constituye nuevas fuerzas que disputan el poder y el retorno a una cultura estamental de tipo colonial. Y así, la red y la calle son parte de un nuevo espacio público ideológicamente diverso.

LAS DEMANDAS DE LAS MUJERES Y SU CAPACIDAD DE AGENCIA

Los antecedentes más significativos en cuanto a los cambios en la subjetividad y la capacidad de acción de las mujeres se vinculan con el movimiento de derechos humanos, a lo largo y ancho de la región, durante las últimas décadas. Desde las movilizaciones y las huelgas de hambre de las madres mineras bolivianas en los años setenta —que culminaron con la instalación de la democracia en Bolivia— o el peso

cultural y político por la paz y los derechos humanos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la Argentina, las Madres de Mayo de Brasil, las mujeres de Colombia, las de Guatemala, así como los recientes movimientos de madres y mujeres por los derechos humanos a lo largo y ancho en América Latina, están modificando el papel de la mujer en la sociedad.

También ha sido muy importante la fuerza simbólica de movimientos feministas de sectores medios ilustrados con fuertes críticas al androcentrismo y con demandas de cambios en la vida cotidiana. Fueron muy importantes sus demandas hacia el Estado y a organismos internacionales, sobre todo de Naciones Unidas, para favorecer la participación de la mujer en las distintas esferas de la vida pública y así fortalecer sus derechos humanos.

Con estos antecedentes se empezó a gestar una nueva lógica, una serie de nuevas demandas y luchas de las mujeres en los ámbitos más diversos de las esferas públicas y privadas que cuestionan cada vez más el régimen patriarcal de poder y dominación. Así, las mujeres y otros movimientos de género han politizado los ámbitos privados de dominación, colocándolos en la escena pública y modificando las relaciones de poder tanto públicas como privadas.

Un movimiento fundamental es el de las mujeres por el derecho al aborto. En 69,5% de los países del mundo el aborto no es una práctica legal y, según informes de Amnistía Internacional, América Latina es la región más desigual del mundo en materia de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Las políticas restrictivas de aborto, junto a las concepciones sociales en torno al tema, empujan a millones de mujeres a realizarse abortos clandestinos. Según estimaciones de la Organización Mundial de la

Salud, se presume que más de 25 millones de mujeres y niñas recurren a condiciones riesgosas de aborto (OMS, 2017).⁷

En este marco, el sitio Women on Web es una comunidad digital de mujeres que busca facilitar la información sobre cómo practicar abortos a mujeres que lo necesitan, usando medicamentos que integran la lista de medicamentos esenciales de la OMS:⁸ mifepristona y misoprostol.⁹ En América Latina, la mifepristona sólo se obtiene en forma legal en Uruguay, donde se aprobó la legalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo en 2012, por medio de la Ley N° 18.987.¹⁰ En la Argentina, Perú y Colombia es posible adquirir misoprostol en las farmacias, aunque su costo varía significativamente entre países.¹¹ Women on Web es, además, una red de encuentro y apoyo para mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos, sobre la base del pleno goce de derechos, con el propósito de romper con la desigualdad de facto, la discriminación y la violencia que sufren.

Otra experiencia muy creativa y cada vez más generalizada en el ámbito internacional es el Movimiento Ni una

⁷ Véase OMS, en <<http://www.who.int/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year>>.

⁸ Para mayor detalle, véase OMS, en <http://www.who.int/medicines/news/2017/20th_essential_med-list/en>.

⁹ Para una guía detallada de cómo deben emplearse ambos medicamentos, véase OMS, 2014: 28-33.

¹⁰ Véase Parlamento del Uruguay, en <<https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5723191.htm>>.

¹¹ En Argentina se comercializa bajo el nombre Oxaprost y en Perú y Colombia, Cyotec, entre otros. Si bien en ninguno de estos países el aborto es legal, es posible adquirir misoprostol porque éste fue desarrollado como protector gástrico. Sin embargo, uno de sus efectos secundarios en las mujeres es la generación de contracciones uterinas. Para mayor detalle sobre la disponibilidad de misoprostol, véase Women on Web, en <<https://www.womenonwaves.org/en/map/country>>.

Menos. “Ni una menos, ni una muerta más” era el lema original y remite a un poema de denuncia por los asesinatos de mujeres en la ciudad de Juárez. Se trata de la lucha de mujeres urbanas iniciada en Argentina con creciente presencia en Chile, Bolivia, Uruguay, México, Guatemala, España y Francia. Su principal objetivo es eliminar la violencia de género y aumentar la participación y el reconocimiento de las mujeres como sujetos con derecho a cuestionar el imaginario machista y de violencia de género en los medios de comunicación, además de promover leyes contra todo tipo de violencia. Entre 2015 y 2017 se realizaron tres grandes movilizaciones convocadas mediante el uso generalizado de las redes de información y comunicación de considerable impacto social, que cuestionaron al poder patriarcal, a la clase política y demandaron leyes que prevean la violencia y el dominio contra las mujeres.

Este movimiento además goza de un amplio reconocimiento en la opinión pública y también con el apoyo explícito de artistas, intelectuales, periodistas, ONG y empresarios culturales, entre otros. El texto y los sitios web citados ejemplifican los distintos momentos de vida de este movimiento.¹²

¹² Ochoa, Ducrot, Anguita y Vallarino (2017). Véanse Telam, en <<http://www.telam.com.ar/notas/201410/81514-culmino-el-29-encuentro-nacional-de-mujeres-con-fuerte-reclamo-por-la-legalizacion-del-aborto.html>>; BBC, en <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/01/110112_mexico_juarez_susana_chavez_an.shtml>; diario *La Nación*, en <<http://www.lanacion.com.ar/1799162-niunamenos-tras-la-manifestacion-crean-una-unidad-de-registro-de-femicidios>>, <<http://www.lanacion.com.ar/1849688-fabianatunvez-presidira-el-consejo-nacional-de-mujeres>>, <<http://www.lanacion.com.ar/1848532-realizan-la-primera-encuesta-sobre-violencia-de-genero-en-capital-federal>>, <<http://www.lanacion.com.ar/1945528-multitudinaria-marcha-del-encuentro-nacional-de-mujeres-en-rosario>>, <<http://www.lanacion.com.ar/1948651-vestidas-de-negro-las-mujeres-pararon-durante-una-hora>>, <<http://www.lanacion.com.ar/1948677-la-protesta-contralos-femicidios-se>>

Una consecuencia fundamental de este enorme cambio en las relaciones de género es la tendencia no sólo al surgimiento de formas de protesta novedosas y diversas de actores y movimientos en todos los países de la región, sino también que la capacidad de transformación de las metas y proyectos de estas acciones se ve acompañada tanto por la búsqueda de resultados concretos como por una pedagogía de comunicación intercultural y democrática entre sus diversos protagonistas. De este modo, quizás uno de los cambios más extraordinarios que empieza a experimentar la sociedad o las sociedades latinoamericanas es el del aumento de la capacidad de agencia de la mujer.

Un ejemplo empírico importante son los hallazgos del *Informe de desarrollo humano sobre los jóvenes en el Mercosur* (PNUD, 2009), particularmente en las grandes ciudades. Allí, se construyó una serie de índices cuantitativos sobre la capacidad de agencia objetiva, subjetiva y democrática, y

convirtió-en-un-clamor-nacional>, <<http://www.lanacion.com.ar/1948746-highton-de-nolasco-los-jueces-no-pueden-dejar-a-todo-el-mundo-presodepor-vida>>; Unidiversidad, en <<http://www.unidiversidad.com.ar/el-mundo-clamo-ni-una-menos>>; Estudio de Opinión Pública. Marcha “Ni una menos”, en <<http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2010/11/encuesta-ni-una-menos-COPES-INFORME-FINAL-enero-2016.pdf>>; Basta de sexismo, en <<http://bastadesexismo.blogspot.com.ar/2015/06/niunamenos-la-hipocresia-de-una.html>>; diario *Clarín*, en <http://entremujeres.clarin.com/genero/NiUnaMenos-tuirazo-violencia_o_1582641837.html>, <http://www.clarin.com/extrashow/fama/famosos-unieron-campana_o_1588641231.html>; diario *Página12*, en <<https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300967-2016-06-04.html>>, <https://www.pagina12.com.ar/diario/el_pais/subnotas/311435-79335-2016-10-10.html>, <<https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312165-2016-10-19.html>>, <<https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-312291-2016-10-21.html>>; radio Agricultura, en <<http://www.radioagricultura.cl/2016/10/19/video-el-mensaje-de-michelle-bachelet-por-la-marcha-ni-una-menos/>>.

prácticamente en todos los casos nacionales, como en todos los ámbitos sociales y etarios, entre los jóvenes de diferentes edades, se encontró una importante capacidad de agencia de las mujeres. Así, por una parte, las mujeres tenían mayor capacidad de articular demandas de ciudadanía vinculadas con una mayor eficacia, demandas de distribución, participación y reconocimiento. Entre las más pobres, el eje de sus demandas era la distribución, entre las más educadas y con mayores ingresos la aspiración era la de participación, y entre las más jóvenes, de reconocimiento como personas.

Con respecto a los índices subjetivos y objetivos de capacidad de agencia, se encontró que 7 de cada 10 mujeres tenían mayor capacidad. En el caso de los varones, 5 de cada 10 tenían alta capacidad (PNUD, 2009: 33).

Así, si se considera, de un lado, los nuevos movimientos de mujeres que luchan por sus derechos y demandan políticas que cuestionan las más profundas bases del poder cultural y, por otro, una tendencia hacia un crecimiento de su capacidad de agencia para manejar sus problemas concretos en la vida cotidiana, es posible confirmar que un nuevo sujeto histórico está emergiendo en la región. Aquí se argumenta sobre un sujeto que busca lograr un cambio cultural y un nuevo sentido de la vida y de la política y que encuentra en su búsqueda a la dignidad como referencia de la vida humana cotidiana. Buscan cambiar el orden patriarcal y la violencia sexista de estas sociedades y, con ello, aspiran a redefinir el cambio de lo que es posible en política y en el campo histórico.

Por último, vale la pena mencionar un tema central: el de los movimientos gay, transexuales y lesbianas, directamente asociados con los cambios en la familia y la descomposición del patriarcado. Se trataría de nuevas subjetividades

y protestas en torno a la autodefinición cada vez más amplia tanto de la orientación como de la identidad sexual, y de formas culturales de vida centradas en la formación de parejas y relaciones que cada vez más escapan a las normas y las costumbres asentadas en la familia y en los valores religiosos tradicionales. Está surgiendo una nueva cultura de las relaciones sexuales y afectivas como rechazo al patriarcado heterosexual, una milenaria cultura de dominación de las personas que prescribe a quiénes podemos amar y a quiénes no.

LAS PROTESTAS ECOLÓGICAS

La opinión pública mundial y buena parte de los países vienen reconociendo un cambio climático global con efectos perversos para la naturaleza y las diversas realidades humanas sin excepción y, con ello, se viene reconociendo también, de manera creciente y constante, el impacto del modo de desarrollo capitalista industrial en prácticamente todas las esferas de la producción y un consumo individualista que legitima e incentiva la creciente crisis ambiental que vive el mundo. Según el *Informe Latinobarómetro 2017*, 83% de los latinoamericanos está de acuerdo con que las personas son las principales responsables por el cambio climático y 71% considera que se le debe dar prioridad a la lucha contra el cambio climático, aunque tenga consecuencias negativas en el crecimiento económico.

Los procesos de degradación y destrucción ambiental han sido impulsados desde los países y empresas más desarrollados industrialmente, mientras los países que sufren las consecuencias sobre su desarrollo han sido precisamente

los más contaminados y los que tienen menor posibilidad de enfrentar el cambio climático y el deterioro ambiental. Los datos de los índices de desarrollo humano y otros del ámbito global son concluyentes, pues los países con mayores índices de desarrollo humano son los países que producen mayor contaminación, mientras que los que tienen índices bajos o muy bajos son los que sufren más sus consecuencias, verificando así que el desarrollo inhumano es también global. En efecto, según el *Informe de desarrollo humano de 2007/2008*, las emisiones de CO₂ per cápita de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2004 eran de 11.5 toneladas, mientras que las de los países de África subsahariana y América Latina y el Caribe eran 1.0 y 2.6 toneladas, respectivamente (PNUD, 2008: 69). Datos del Banco Mundial para 2014 muestran una tendencia decreciente en las emisiones de CO₂ en los países de la OCDE, pero se mantienen las disparidades entre las regiones mencionadas (Banco Mundial, 2018).

Este fenómeno y, en especial, las nuevas formas del “extractivismo informacional” (véase capítulo 11) han producido importantes transformaciones subjetivas en la opinión pública latinoamericana, una notable expansión de redes de ONG globales, sobre todo de carácter sectorial, y una notable multiplicación de protestas de resistencia ecológica, particularmente en los territorios donde se vienen expandiendo los nuevos emprendimientos extractivos, todo ello generando importantes problemas políticos a los estados y en las empresas. En este contexto, sobresalen la emergencia de culturas ecologistas de los pueblos originarios y la revalorización de formas de vida en consonancia con una sana reproducción de la naturaleza. El derecho a la vida es de la

naturaleza misma y así, aquí también, se estaría conformando un nuevo campo de conflicto histórico.¹³

ALGUNOS EJEMPLOS EN LA REGIÓN ANDINA

Un caso emblemático es la movilización por el Tipnis en Bolivia (región andino-amazónica de 1200 000 hectáreas) promovido por comunidades de tsimanes, yuracarés y mojeños. Allí existen tres microsistemas de biodiversidad ecológica que necesitan autorreproducirse en condiciones ambientales naturales para no romper su equilibrio ecológico. El gobierno, de orientación neodesarrollista e indigenista andina, promovió la construcción de una carretera por medio del territorio del Tipnis para producir una mayor integración territorial y crear condiciones para un mayor crecimiento económico.

Como reacción se produjo una importante marcha comunitaria desde el norte de Bolivia, en el departamento de Pando, hasta la ciudad de La Paz, a más de mil kilómetros de distancia. La protesta se inició con alrededor de 600 personas, que al llegar a La Paz contaron con el apoyo movilizadado de más de medio millón de personas. La interrelación de la marcha, la opinión pública y el apoyo de redes ecologistas globales se hizo a partir de redes de información y comunicación.

Y así se constituyó un espacio de conflicto por el territorio entre un gobierno neodesarrollista y las comunidades del Tipnis que defendían una reproducción cultural basada

¹³ Para más información sobre protestas y conflictos relativos al medioambiente desagregados por país, véase Environmental Justice Atlas, en <<https://ejatlas.org/>>.

en un ecoterritorio sostenible. En el conflicto estaban en juego, por una parte, la defensa del territorio del Tipnis y, por la otra, un complicado sistema de intereses de empresas petroleras como Total y Petrobras, intereses de expansión de la economía de la soja, empresarios madereros del norte y, en términos más estratégicos, el fortalecimiento del proceso de integración con Brasil, Asia y el Pacífico. Al final, se impuso la vía comunitaria y se introdujeron cambios en la Constitución a favor del Tipnis, aunque en términos reales sigue pendiente la resolución del proyecto a favor del poder del Estado (Aramayo, 2011; revista *Tierra*, 2018).

Anthony Bebbington, en el estudio que coordinó sobre conflictos sociales e industrias extractivas, resalta algunos de los perfiles y conflictos políticos institucionales de varias empresas y territorialidades en Bolivia, Ecuador y Perú.

La tesis está centrada en la perspectiva de la gobernanza. Allí se afirma que “el fortalecimiento institucional es un proceso político en el que el conflicto socioambiental puede jugar un rol potencialmente constructivo” (Bebbington, 2013: 121) y en una de las conclusiones destaca que “[...] a través de los estudios de caso queda claro que la dinámica y los resultados del conflicto están determinados por la interacción entre, por un lado, estos factores relacionales y estructurales y, por otro lado, factores locales. Las historias sociales y político-económicas locales son cruciales para determinar la forma en la que las industrias extractivas son interpretadas, la probabilidad y la naturaleza del conflicto, y las formas en las que el conflicto —de surgir— es gestionado”.

En la mayoría de los casos, se trata de la defensa de poblaciones de sus territorios frente a megaproyectos extractivos que generan incertidumbre en la sociedad, en cuanto a sus medios de subsistencia (agua, tierra) y el control de sus

territorios. Y en todos los casos, se trata “de regiones de América Latina que son pobres en capital financiero y ricas en diversidad biológica y cultural, las arraigadas desigualdades sociales y económicas planean retos muy específicos para el diseño y aplicación de políticas” (Bebbington, 2013: 273).

“No obstante —señala el estudio—, las diversas inclinaciones políticas de los presidentes de Bolivia, Ecuador y Perú, ellos siguen modelos de desarrollo económico basados en la extracción y exportación de recursos mineros e hidrocarburos.” Debates polarizados sobre la “maldición de los recursos” convergen en la idea de “la importancia de la calidad institucional y del contexto a la hora de determinar los efectos de las industrias extractivas sobre el desarrollo” (Bebbington, 2013: 120).

En los conflictos se combinan dinámicas locales, nacionales e internacionales que los conectan a través de gobiernos, mercados y sociedad civil. En general, se trata “de regiones de América Latina que son pobres en capital financiero y ricas en diversidad biológica y cultural, las arraigadas desigualdades sociales y económicas planean retos muy específicos para el diseño y aplicación de políticas” (Bebbington, 2013).

Los conflictos ecológicos estudiados fueron los de Bagua y Camisea en Perú, los del Chaco y Pilcomayo en Bolivia, y los de Mandato Minero y Amazonia en Ecuador.

Otro caso particularmente complejo fue el conflicto ambiental entre los vecinos de Gualaguaychú, la planta finlandesa Botnia, los estados de Uruguay y Argentina y un complejo sistema de intereses privados y políticos locales. Se trató de un conflicto de larga duración sobre los efectos de contaminación del río debido a plantas procesadoras de celulosa. La instalación de la planta procesadora de celulosa

produjo un cambio ambiental que afectó la vida política y la convivencia entre Uruguay y Argentina y puso de manifiesto las dificultades de las políticas nacionales para resolver las demandas ecológicas de una sociedad local. El estudio de Vicente Palermo, “El gobernador pasó en helicóptero”, muestra con detalles la complejidad de este tipo de conflictos ambientales, los límites de la política y de los mismos estados (Palermo *et al.*, 2009).

Para finalizar, si se retoma una visión integrada de estos nuevos tipos de conflictos y movimientos es posible concluir que un nuevo campo histórico ha emergido y que, posiblemente, ha pasado a reorganizar la nueva América Latina en la era de la información. Se estaría gestando de manera asincrónica una nueva politicidad que redefine los campos de la política y el poder. Son cambios culturales asociados con crónicos problemas de desigualdad, inseguridad, contaminación, sexismo, pobreza y desarrollo inhumano que vive la región y su evolución está porosa e intrínsecamente vinculada con esas crónicas realidades. Empero, hasta el momento, si bien los nuevos tipos de conflicto se han multiplicado, ellos permanecen fragmentados entre sí y su dinámica en gran medida está asociada no sólo a nuevas formas de diferenciación social, sino en lo particular a nuevos complejos mecanismos de diferencia funcional en los diversos procesos tecnoinformacionales y comunicacionales y de redes de información casi infinitas, pero no siempre interconectadas.